

su reglamento de treinta y uno de Diciembre del mismo año, la intervencion de la Justicia federal solo tiene lugar cuando hay contencion de causas, y mientras esto no sea, los tribunales de la Federacion no pueden avocarse el conocimiento del negocio.

Que aun en el caso de contienda sobre el título de la multa, en virtud de las expresadas leyes, toda autoridad y aun todo empleado está en el deber de hacer efectiva la multa que se haya impuesto hasta dejar asegurados los intereses de la Hacienda pública, y solo despues de esto, será cuando ya pueda la autoridad judicial de la Federacion, conocer de esa multa en el juicio respectivo, y con audiencia del Promotor fiscal, como legítimo representante del Fisco.

Que en lo que referencia al concurso de Cabrera, no consta de autos que exista la contienda ó contencion que las leyes citadas requieren como condicion precisa para que el Juez federal se avoque el conocimiento del asunto en cuestion; por estos fundamentos, y demas en que se apoya el Juez 2º de Letras de San Luis Potosí, se declara:

Primero: Que este Juez es el competente para seguir conociendo de la multa que impuso al concurso de D. Francisco H. Cabrera, por no haber llevado este los libros de su negociacion en el papel sellado que correspondia.

Segundo: No hay condenacion en costas.

Tercero: Remítanse las actuaciones al Juez 2º de Letras de San Luis Potosí, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Remítase copia igual al de Distrito del mismo Estado para su conocimiento. Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias. Juan J. de la Garza. — Simon Guzman. — M. Zavala. — Enrique Lanza*, secretario.

Son copias. México, Mayo veintiuno de

mil ochocientos setenta y cuatro.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial segundo.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por D. Ramon de la Portilla, contra el Gefe político de Irapuato, que lo redujo á prision.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por D. Ramon de la Portilla, su estado supuesto que es el de alegar, dice: que durante el término probatorio no se han rendido ningunas pruebas, por cuya causa los únicos datos para resolver si debe concederse el amparo de la Justicia de la Unión, son el escrito de queja y los informes de la autoridad responsable.

El quejoso fué aprehendido por el C. Gefe político de Irapuato, en virtud de un parte telegráfico de la autoridad política de Abasolo, y trascurrió el término legal de detension sin que se hubiera dictado el auto de formal prision como está comprobado con la partida de entrada á la cárcel de Irapuato, y la declaracion del alcaide de la misma prision. Tales procedimientos en sentir del quejoso, violan en su persona las garantías individuales consignadas en los arts. 16, 17 y 19 de la Constitucion federal.

El C. Gefe político de Irapuato á su informe con justificacion, acompañó originales dos telegramas de la autoridad política de Abasolo, en los cuales se solicitaba la aprehension del quejoso, y se le avisaba que pronto recibiria un exhorto del C. Juez 4º de Letras de San Luis Potosí, el cual asegura fué recibido, y segun se dice en el informe, la causa de la aprehension era el delito de estafa.

Los dos telegramas que obran en las actuaciones, no son bastantes para justificar

la aprehension del quejoso, supuesto que no se expresa la causa legal del procedimiento, ni ellos pueden hacer las veces de un auto motivado de prision; pero el exhorto del C. Juez 4º de Letras de San Luis Potosí, segun dice la autoridad responsable, hecho que no ha desmentido el quejoso, justifica los procedimientos de detension y aprehension, porque sí se expresa que la causa de ellas es un delito castigado con pena corporal, y aunque no se haya dictado el auto de prision, no estando consignado á su juez, y atendiendo á la distancia de Irapuato á San Luis y á que de otra manera la administracion de justicia no sería posible en los casos en que el reo estuviera ausente, el exhorto debe considerarse como bastante para justificar la detension del quejoso, haciendo las veces de auto de formal prision.

Por estas consideraciones, el Promotor fiscal pido se sirva el Juzgado denegar el amparo que se solicita.

Guanajuato, Febrero 12 de 1874.—*José Aguilar y Córdoba.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 8 de Abril de 1874.—*Albino Torres.*—A.—*Antonio Villaseca.*—A.—*Manuel Anda Siliceo.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 31 de Marzo de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Ramon de la Portilla, contra el C. Gefe político de Irapuato que lo redujo á prision, violando en concepto del quejoso, las garantías que consigna el Pacto federal en sus arts. 16, 17 y 19; resultando, que la providencia que motivó la queja, dimanó de un telégrama que aquella autoridad recibió del C. Gefe del partido de Abasolo, en cuyo documento se recomendaba la aprehension del agraviado; resultando: que la autoridad política de Cuitzeo de Abasolo, procediendo á cumplimentar un exhorto librado por el C. Juez 4º de Letras de San Luis

Potosí, dictó la orden ejecutada por el Gefe del Partido de Irapuato. Considerando: que los Gefes políticos tienen facultades de promover y proceder en su caso á la aprehension de personas que se reputen culpables; y por lo mismo no se ha conculcado el art. 16 de la Constitucion en la persona del quejoso, cuya prision tuvo lugar mediante un mandamiento escrito de autoridad competente, que funda y motiva la causa legal del procedimiento; pues así lo persuade la requisitoria de que se ha hecho referencia y en la cual consta, que á instancia de D. Pedro Gonzalez y previa la informacion correspondiente, el expresado Juez decretó la aprehension de D. Ramon de la Portilla, por el delito de estafa. Considerando: que este delito es de los que merecen pena corporal, y no puede estar comprendido en las deudas puramente civiles de que habla el art. 17 del Pacto federal. Considerando: que la detencion del promovente fué legal, y que á pesar de que su duracion fué de mas de tres dias, no puede estimarse como violacion del art. 19 que se invoca en la demanda, supuesto que el exhorto que se ha mencionado tiene la misma fuerza y produce los mismos efectos que el auto motivado de prision, ya se atiende al deber que tienen las autoridades de cada Estado de entregar sin demora los criminales de otros Estados á la autoridad que los reclama, como lo prescribe el art. 113 del Código fundamental de la República, ya se mire á los intereses de la administracion de justicia, que serian evidentemente perjudicados con la falta de cumplimiento del art. últimamente citado. Considerando: que varias ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, y entre otras la del juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, contra el Gobernador de aquel Estado, por el C. Rafael María Taboada (Semanario Judicial de la Federacion tomo tercero, pagina 233), han sancionado el principio de que la detencion prolongada por mas de tres dias no es anticonstitucio-

nal, cuando se funda en una requisitoria que tenga todas las solemnidades que el derecho exige.

Por tales consideraciones, de conformidad con el pedimento fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ramon de la Portilla, contra la providencia del Gefe del partido de Irapuato, en virtud de la cual fué aprehendido el quejoso y consignado la Juzgado 4º de Letras de San Luis Potosí, por el delito de estafa.

Notifiquese este fallo á las partes; publíquese en el periódico oficial, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito, sentenciando definitivamente y actuando por receptoría, lo decretó, mandó y firmó. Damos fé.—*Albino Torres.—A.—Antonio Villaseca.—A.—Manuel Anda Siliceo.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 1º de Abril de 1874.—*Albino Torres.—A.—Antonio Villaseca.—A.—Manuel Anda Siliceo.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 28 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Ramon de la Portilla, ante el Juzgado del Partido de Irapuato y continuado ante el Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, contra el Gefe político de Irapuato que lo redujo á prision, infringiendo en concepto del solicitante, los arts. 16, 17 y 19 de la Constitucion; visto el informe de la autoridad responsable: las diligencias practicadas; el parecer del Promotor fiscal; la sentencia del inferior, y

Considerando: que no existe la infraccion del art. 16, por estar facultadas las Autoridades políticas para aprehender bajo su responsabilidad á las personas que se reputen culpables.

Que no se ha infringido el art. 17, por no haber motivado la prision una deuda de un caracter puramente civil, sino haber sido acusado el solicitante del delito de estafa ante el Juez 4º de Letras de San Luis Potosí.

Que habiendo sido la causa de los procedimientos del Gefe político de Irapuato, la formal requisitoria de la autoridad judicial de San Luis Potosí comunicada por el Gefe político de Abasco para la aprehension del solicitante, aun cuando la prision se prolongase por mas de tres dias, debe considerarse el exhorto hecho conforme á derecho como un auto motivado de prision; decision que está en consonancia con las prescripciones constitucionales como lo ha resuelto este Tribunal.

Que en consecuencia, tampoco hubo infraccion del art. 19 de la Constitucion federal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 da la misma, se declara: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo á D. Ramon de la Portilla.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—Luis Velasquez.—Lic. Enrique Landa, secretario.*

Es copia que certifico. México, Mayo 11 de 1874.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*